

La violencia de los números: Una crítica de las interpretaciones del Ser–Fedesarrollo

Rodrigo Uprimny*

"Es preciso reflexionar para medir y no medir para reflexionar"

Gastón Bachelard Citado por Alain Lipietz.

El capital y su espacio. México: Siglo XXI, 1979, p.17.

No existe en Colombia una tradición seria de crítica y de debate académico. Esta se encuentra aún en proceso de formación. Desgraciadamente, el dogmatismo cultural y la intolerancia reinantes en el país a través de toda su historia, han tendido también a invadir las aulas universitarias y los centros de investigación científica, evitando que se consolide lo que debiera ser la esencia de la universidad y la investigación científica, esto es, la producción de un saber y una cultura libres en un ambiente de fuerte discusión democrática. Seguimos así encerrados en un modo de pensar escolástico, sin que logremos acceder a la modernidad, a la socialización de la discusión y de la crítica, a eso que Kant

llamaba hace más de dos siglos la esencia de la "Ilustración": "la mayoría de edad" como "capacidad de servirse del propio entendimiento" y "libertad de hacer uso público de la propia razón en todo respecto"¹.

Esa falta de debate académico serio y generalizado es grave. De una parte, impide la profundización del conocimiento social por cuanto contribuye al aislamiento intelectual de los investigadores y fomenta visiones esquemáticas y parciales de la realidad, al no permitir que concepciones alternativas se confronten. De otra parte, tales actitudes obstaculizan la creación de una cultura de la tolerancia que sirva de

* Abogado, Comisión Andina de Juristas.

¹ Cf. Kant Manuel. "Respuesta a la pregunta: ¿qué es la ilustración?".

fundamento de la democracia como forma de vida y no como simple estructura política: la crítica honesta y severa de la concepción ajena, lejos de implicar rechazo de la diversidad, es el fundamento del respeto a la misma. Finalmente, pero no por ello menos importante, las elaboraciones intelectuales pueden jugar un papel social de gran trascendencia ya que inciden en la manera como una comunidad se representa a sí misma. El investigador académico debe entonces asumir esa responsabilidad social de lo que dice, a través del debate abierto de sus planteamientos.

Es pues necesario abrir nuevos espacios de diálogo y de comunicación crítica a fin de estimular la formación de una tolerancia activa en nuestro país, profundizar en el conocimiento de nuestra realidad y conferir a la academia un sentido de responsabilidad social. Este ejercicio de la crítica puede en ocasiones herir susceptibilidades y no ser siempre recibido positivamente; sin embargo, como dijo alguna vez Gastón Bachelard, "la verdad es hija de la discusión y no de la simpatía"².

El objeto de este artículo es entonces contribuir a la consolidación de ese ambiente de discusión democrática al cual aspiramos, a través de la crítica del ensayo de interpretación de la violencia homicida publicado en el número 2 de **Coyuntura Social**, editado conjuntamente por el SER y FEDESARROLLO³. Esta interpretación, que confiere el peso esencial de la violencia

homicida al narcotráfico, nos parece desafortunada en sus precipitadas conclusiones. Por ello, debido a la importancia del tema, al fundamentalismo ético con el que es tratado usualmente el tema del narcotráfico, y al prestigio académico de estas dos instituciones que da gran autoridad social a sus conclusiones, nos parece necesario discutir críticamente ese texto. Para ello veremos inicialmente (I) la metodología empleada por los investigadores, para luego criticar la consistencia del planteamiento (II) y, finalmente (III), hacer unas consideraciones generales sobre los efectos sociales perjudiciales de ese tipo de planteamientos.

I. Un número de magia: la metodología del estudio

El estudio busca hacer una interpretación de la evolución del homicidio en Colombia en la década de los ochenta, tratando de estimar cuáles han sido los móviles determinantes de esta conducta. La metodología usada es bastante simple: los autores, luego de reconocer que "muchas veces es poco menos que imposible establecer por qué una persona fue asesinada", buscan hacer una estimación indirecta de los móviles de esa violencia homicida. Evalúan primero el alcance del homicidio político o presumiblemente político, el cual es calculado con base en fuentes diversas como la Revista Justicia y Paz, la Policía Nacional o el DAS. Luego calculan el homicidio por violencia social con el siguiente método: mirando la evolución de la tasa de homicidio en los

2 Gastón Bachelard. "La filosofía del Número", Buenos Aires: Amorrortu.

3 Ver **Coyuntura Social** No. 2, el capítulo II sobre Justicia y Criminalidad, pag. 31 a 36, donde los autores intentan una aproximación a los tipos de homicidio.

últimos 30 años, el artículo muestra que la tasa más baja fue la de 1975. Se concluye entonces que esos homicidios pueden ser atribuidos a la delincuencia común.

Luego, bajo el supuesto de que esta violencia crece a un ritmo constante y similar al de la población, se aumenta en un 3% anual la cifra de 1975, (bajo el supuesto de que la urbanización creciente implica un incremento de la delincuencia), y se obtiene lo que los autores llaman la delincuencia esperada. Finalmente, se constata que en los años ochenta hay una cantidad creciente de homicidios que no son ni los "esperados" por delincuencia común, ni los correspondientes a la violencia política.

Concluye entonces el estudio: "La cifra que así se obtiene correspondería a los

homicidios atribuibles, directamente o indirectamente, a factores nuevos, aparecidos desde mediados de la década del 70 en adelante y que serían ante todo los relacionados con el narcotráfico". Así, mediante una simple frase, todo ese número de homicidios no explicados, se "explica" atribuyéndola al narcotráfico llegándose entonces al Cuadro 1.

II. Un número sin magia: las inconsistencias del estudio

Intentar descifrar las motivaciones de la violencia homicida por estimaciones teóricas indirectas es un procedimiento legítimo, debido a la dificultad que existe actualmente para lograr análisis directos. Sin embargo, el estudio presenta fallas profundas que invalidan el ejercicio.

Cuadro 1
DISTRIBUCION DE LAS MUERTES VIOLENTAS EN COLOMBIA SEGUN MOVILES
(1980-1989)

	Total Homicidios (D)	Homicidios políticos o presumiblemente políticos (A)	Delincuencia "esperada" (o delincuencia común) (B)	Diferencia mayoritaria- mente narcotráfico (C=D-A-B)	(A)/(D)	(B)/(D)	(C)/(D)
1980	9.122	389	6.710	2.023	4	74	22
1981	10.713	965	6.911	2.837	9	65	26
1982	10.580	1.221	7.118	2.241	11	68	21
1983	9.721	1.775	7.332	614	18	76	6
1984	10.694	2.056	7.552	1.086	19	71	10
1985	12.899	3.297	7.779	1.823	26	60	14
1986	15.672	3.345	8.012	4.315	21	51	28
1987	17.419	3.473	8.252	5.694	20	47	33
1988	21.100	3.970	8.500	8.630	19	40	41
1989	23.312	3.303	8.755	11.254	14	38	48

Tomado de Coyuntura Social No. 2, FEDESARROLLO, Mayo 1990. pg.34.

Para comenzar está la imprecisión conceptual: categorías centrales como delincuencia común y narcotráfico no son definidas. Esto es grave pues estas nociones están lejos de ser unívocas.

Así, con respecto al narcotráfico es posible distinguir muy diversas formas de violencia. En efecto, aún cuando el narcotráfico –en tanto que forma de acumulación basada en una renta ilegal– lleva implícita la violencia, ella no afecta por igual a los diferentes participantes de la economía de droga, ni tiene por qué adquirir la intensidad y modalidades paramilitares y terroristas que ha tenido en Colombia. En tales circunstancias, creemos que al menos se deben diferenciar las siguientes formas de violencia ligadas a la economía de la droga:

- Aquella que está dirigida a los ajustes internos de cuentas (violencia intra o intermafias, que podríamos llamar también formas de competencia armada), y que se deriva de la inexistencia de mecanismos de mediación institucional entre las diferentes fracciones insertas en el circuito de la renta de la droga.

- Aquella desarrollada en forma selectiva contra funcionarios estatales, políticos y periodistas, como mecanismo de protección, debido a la ilegalidad del narcotráfico.

- La que enfrenta a los empresarios de la droga con quienes pretenden cambiar el orden social, puesto que la mafia –como fracción dominante de la economía de droga– a pesar

de su ilegalidad (y por consiguiente, de sus eventuales conflictos con las autoridades oficiales) tiene una naturaleza esencialmente conservadora.

- Finalmente, el recurso al terrorismo y a la violencia indiscriminada contra funcionarios políticos como mecanismo de presión social y política, para forzar negociaciones con el poder político, una vez que el narcotráfico se ha convertido en un asunto de Estado.

Así, al lado de los ajustes de cuentas, de los atentados contra funcionarios y aún del “narcoterrorismo” (mucho más espectacular y en primer plano) y que tiende a enfrentar a las mafias entre sí y con los funcionarios estatales, se desarrolla un “narcoparamilitarismo” (más discreto y silencioso pero mucho más salvaje) para amedrentar y aniquilar los movimientos populares y reivindicativos.

Portales circunstancias creemos que hablar del narcotráfico en forma genérica e indiferenciada no parece tener mucho sentido.

Pero igualmente imprecisa es la categoría delincuencia común. En su obra ‘Colombia: ciudad y violencia’, Alvaro Camacho Guizado y Alvaro Guzmán Berney criticaron con vigor el empleo de esta noción, por considerarla como una categoría simplemente residual, como una especie de comodín con el que se pretende explicar la criminalidad y la violencia no explicada por otros factores⁴. Ese sentido tiene exactamente la noción en el

⁴ Ver Camacho Salcedo Alvaro y Guzmán Berney Alvaro “Colombia: ciudad y violencia” Bogotá: Foro Nacional, 1990. p.24, señalan con acierto los autores que con el empleo de esa noción se pierde “la especificidad del espacio social, político o económico. Es decir se volatiliza en su vaga generalidad e inexactitud”.

estudio del Ser-Fedesarrollo, puesto que la violencia de 1975 se atribuye, sin justificación alguna, a la "delincuencia común, sin contaminación por violencia política o por la violencia del narcotráfico".

La "delincuencia común" en este estudio es simplemente el número de homicidios no explicados de 1975, aumentados en un 3%. Lo paradójico es que para los años siguientes esta categoría residual parece adquirir sustancia, a tal punto que el estudio introduce el narcotráfico—sin definirlo, como ya lo vimos— como una nueva categoría residual interpretativa, puesto que lo que no es atribuido a la violencia política (la única que es evaluada con fuentes directas) a la violencia de delincuencia común (residuo de 1975 aumentado en un 3%) se atribuye al narcotráfico. Pero si en matemáticas menos por menos da más, a nivel interpretativo, dos categorías residuales no producen en modo alguno una explicación satisfactoria. En sentido estricto, lo único que se desprende del estudio es que en 1975 había una violencia no explicada a la que se llama delincuencia común; y que en 1989, si descontamos la violencia política, esa violencia no explicada creció a un ritmo más elevado que el crecimiento de la población, luego la cantidad de homicidios sin motivación conocida es aún mayor. Para que la estimación efectuada de atribuir esa violencia al narcotráfico fuera aproximadamente plausible se necesitaría aceptar al menos los siguientes supuestos:

- Que la noción de delincuencia común, como es presentada, tiene sentido y engloba

efectivamente la violencia homicida de 1975.

- Que no hay ciclos de delincuencia común, por lo cual se puede suponer que ésta se mantiene constante y crece al ritmo de la población, hipótesis bastante discutible.

- Que el único factor nuevo de trascendencia desde mediados de los años 70 es el narcotráfico, lo cual es absolutamente inaceptable y contrario a las profundas transformaciones sociales y políticas de este período histórico.

Sin embargo, aún aceptando en gracia de discusión, la metodología del estudio, hay datos bastante sorprendentes sobre los que no hay ninguna explicación. Los movimientos de la violencia narcotraficante son erráticos durante la década: de 1981 a 1983 baja sensiblemente, en números absolutos y relativos, pasando de 2.837 homicidios en 1981, lo cual representaba el 26% del total nacional, a 614 en 1983, lo cual representaba el 6% de ese total. Luego esta violencia atribuida al narcotráfico vuelve a crecer, pero a mediados de la década, en 1985, sigue siendo menor, en términos relativos y absolutos, que a inicios de la década, lo cual contrasta con la expansión del narcotráfico en ese período.

Así, 1982 y 1983 son años de bonanza coquera, según estimaciones de diversos economistas⁵, por lo cual debió haber aumentado y no disminuído la violencia asociada a este negocio. A partir de 1986, la violencia narcotraficante se "dispara" y en

5 Ver al respecto las cifras de Kalmanovitz y Gómez, en general divergentes pero coincidentes en este punto, *Economía colombiana*, febrero-marzo 1990.

1989 "explota"; sin embargo, el estudio no ofrece ninguna explicación sobre este tipo de variaciones, que dicho sea de paso, no coinciden con el constante aumento de la violencia homicida en una ciudad como Medellín, en donde ese tipo de asociaciones entre narcotráfico y violencia podrían ser más plausibles⁶. Así, en 1980 hubo en esta ciudad 663 homicidios y en 1989, la cifra se elevó a 4.015, dándose un incremento año a año (Ver Cuadro 2). Lo que no se entiende es por qué existe esa constancia del crecimiento en Medellín, y esa evolución cíclica a nivel nacional.

Igualmente, las insinuaciones del texto sobre dinámica regional de esta violencia atribuida al narcotráfico son muy discutibles.

Cuadro 2
VIOLENCIA EN MEDELLIN: VICTIMAS DE HOMICIDIO

Año	Arma de fuego	Arma Blanca	Total
1980	431	232	663
1981	625	257	882
1982	653	249	902
1983	656	212	868
1984	852	304	1156
1985	1300	374	1674
1986	1657	355	2012
1987	2057	310	2367
1988	2844	456	3300
1989	3546	469	4015
Total	14621	3218	17839

Fuente: Instituto de Medicina Legal de Antioquia, tomado de El Tiempo, enero 11/90, p.10A.

6 Sin embargo, habría que explicar por qué ese cartel, a diferencia del de Cali, utiliza tan corrientemente la violencia. Igualmente, es más que discutible que toda la violencia sicarial se deba al narcotráfico.

7 En su cuadro sobre escenarios de violencia, estos autores ni siquiera tienen en cuenta al narcotráfico, el cual sí cabe en los ajustes de cuentas. Sin embargo esta categoría es mucho mas amplia, pues incluye otras formas privadas y violentas de solucionar conflictos.

8 Coyuntura Social, No.2, p.28.

Cuadro 3
ESCENARIO DE VIOLENCIA EN CALI
1980-1986

	%
Atraco	34.8
Riñas y alcohol	23.4
Ajuste de cuentas	17.4
Enfrentamientos militares	7.5
Limpieza Social	7.3
Familiar	4.5
Sexualidad	1.5
Otros	3.6

Fuente: Camacho Guzmán. Op.cit.

Así, la afirmación de que la violencia de Antioquia y Valle, donde tuvo lugar gran parte de los homicidios de 1989, se debería a que allí residen los dos carteles del narcotráfico, no parece tan contundente como pudiera pensarse. Si bien en Antioquia, ella puede ser más estrecha debido a las especificidades del llamado Cartel de Medellín, el estudio de Camacho y Guzmán sobre la violencia urbana en Cali, mostró, con base en una masa importante de "hechos debidamente comprobados", que el peso del narcotráfico era relativamente poco considerable⁷ (Cuadro 3).

Además no se entiende por qué en 1988, según los datos de SER-FEDESARROLLO⁸ la violencia en el Valle fue un 8% inferior a lo "esperado según el tamaño de su población", si muchos analistas coinciden en mostrar que

el Cartel de Cali se ha fortalecido en los últimos años, aprovechando la ofensiva gubernamental contra el Cartel de Medellín. Igualmente, la conclusión debería ser que el peso del narcotráfico en departamentos como Risaralda y Caldas, debe ser considerable pues tienen un porcentaje considerablemente superior a lo “esperado según el tamaño de su población”⁹, conclusión contraria a la evidencia empírica.

III. La magia del número: una especulación vuelta dato

Sin embargo, el problema más grave del trabajo del SER-FEDERARROLLO es el siguiente: las cifras así producidas por simple y discutible especulación estadística, son luego presentadas, debido al prestigio de estas entidades, como “dato” por los medios de prensa. *El Tiempo* publicó el 7 de junio que el narcotráfico era el eje de la criminalidad, dando las cifras del estudio de Fedesarrollo pero sin explicar su metodología. Ese mismo día, *El Espectador* dió esas mismas cifras en noticia de primera página, sin explicar tampoco como fueron evaluados esos datos. Únicamente la revista *Semana* (junio 12/90) presentó con cierto detalle la metodología del estudio.

De esa manera, estudios como el señalado no sólo no ayudan a un mejor entendimiento del problema de la violencia en Colombia, sino que contribuyen—explícita o tácitamente— a avivar el fundamentalismo en el tema de la droga, pues de un día para otro la opinión

pública se entera por primera página que “Fedesarrollo revela que la mafia (ya ni siquiera el fenómeno narcotráfico) cometió 11.254 crímenes en 1989” (*Espectador*, junio 7/90, p.1A). Esto es grave pues las palabras no son inocentes¹⁰, los contextos discursivos y la utilización de ciertos énfasis tienen consecuencias trascendentales en la vida práctica de los hombres, no sólo por cuanto expresan motivaciones no siempre explícitas de las acciones tomadas o por tomar, sino también porque determinan el horizonte mismo de las “soluciones válidas”.

Los discursos funcionan como un principio de articulación de prácticas sociales diversas, como un mecanismo de homogeneización de elementos disímiles. En buena medida somos lo que decimos, puesto que los discursos determinan muchos comportamientos. El lenguaje, solía decir el filósofo Wittgenstein, es una forma de vida. Por eso, estimaciones como las realizadas en el estudio tienen consecuencias importantes, pues fortalecen nacional e internacionalmente una visión según la cual el problema de Colombia reside exclusiva y esencialmente en algo genérico llamado narcotráfico, con todas las consecuencias prácticas que eso puede tener.

De allí la importancia de evitar generalizaciones de este tipo y comenzar a distinguir los posibles diversos aspectos y niveles que componen el problema de las drogas, si queremos avanzar en el debate al respecto. Mucho más importante que la sofisticación estadística de un estudio—que en este caso no

9 Ibidem, p.28 y 117. Esto obviamente sin discutir la pertinencia de esa categoría.

10 En este punto nos basamos en nuestro texto “La guerra a las drogas: ¿Una represión adictiva?” Bogotá: mimeo Comisión Andina de Juristas, 1990.

es mayor—es el sentido conceptual del mismo, pues retomando el epigrafe de Bachelard, “es preciso reflexionar para medir y no medir para reflexionar”. De allí la importancia de avanzar en la conceptualización de lo que está en juego en el llamado problema de las drogas.

Muy esquemáticamente, y sin que la enumeración pretenda ser taxativa, creemos que es posible diferenciar al menos cinco fenómenos diversos que integran lo que muy genéricamente podríamos denominar el “problema” de las drogas. Nos parece que si bien estos fenómenos se relacionan estrechamente, es necesario diferenciarlos si queremos avanzar en el debate. De un lado, tenemos el problema primario a nivel social—todas las dificultades individuales, de salud, familiares, laborales, etc., ligadas al consumo creciente de sustancias sicotrópicas—fenómeno complejo pero aún insuficientemente estudiado. En segundo término, el problema de aplicación de la ley penal debido a la declaratoria de ilegalidad de la producción, comercialización y consumo de ciertas drogas. Se trata pues de reprimir a unos empresarios contrabandistas de drogas, capaces de desarrollar actividades muy violentas y corromper importantes esferas debido a los recursos que movilizan.

En tercer término, encontramos los aspectos socio-políticos, ya que la consolidación de la economía de la droga genera problemáticas que trascienden ampliamente los límites de la ley penal; igualmente, es necesario estudiar el contexto socioeconómico en el cual se expanden los cultivos ilícitos, puesto que parece clara la relación, en países como Bolivia, entre la

crisis minera debido a la caída de los precios internacionales del estaño y la expansión de la producción de hoja de coca en la región del Chapare.

En cuarto término, está el problema de la violencia asociada al narcotráfico, en especial cuando ella supera los límites de la “competencia armada” entre diversos contrabandistas de drogas y seliga a atentados terroristas y actividades de contrainsurgencia, como ha sucedido con el llamado narcoterrorismo y narcoparamilitarismo en nuestro país. Finalmente, está el problema internacional puesto que el narcotráfico relaciona países pobres productores de drogas ilegales con países ricos consumidores de las mismas, proveedores de insumos químicos y de armas, y poseedores de las redes financieras a través de las cuales los narcodólares adquieren respetabilidad.

Una vez que se ha distinguido estos niveles, creo que es posible avanzar bastante en la discusión. Así, se verá que la prohibición penal no es más que un mecanismo ideado para controlar la extensión del consumo de ciertas sustancias consideradas tóxicas. Se trata entonces de una intervención del derecho penal a fin de solucionar un problema social complejo (salud, desintegración familiar, etc.), y por ende, cabe siempre preguntarse si tal intervención es legítima y eficaz o si, por el contrario, sus costos en términos de criminalidad asociada, restricciones a las libertades individuales, sobrecarga del aparato judicial y carcelario, violencia y desvío de recursos económicos, superan ampliamente sus eventuales beneficios.

También, gracias a los análisis de la criminología crítica, es posible interrogarse si detrás de la prohibición no juegan elementos discriminadores de otra índole. En efecto, un breve análisis muestra que el tratamiento punitivo de diferentes drogas no tiene una relación estricta con su peligrosidad. Así, drogas supremamente tóxicas no son penalizadas o lo son muy levemente, mientras que drogas menos tóxicas reciben fuertes sanciones, tanto a nivel del uso como en lo que respecta a su producción y comercialización. Un ejemplo ilustrativo es el caso del opio en donde, como lo muestra Sebastián Scherer, hubo una criminalización diferencial, puesto que en 1909, en Estados Unidos, se prohibió fumar opio pero no se criminalizó el consumo de otras formas de opiáceos como la morfina y la heroína que parecen ser mucho más dañinos en términos de salud. Concluye entonces Scherer: "El tipo menos peligroso de consumo en términos de salud, es decir, fumarlo, fue rápidamente sujeto a criminalización, mientras que el más peligroso (inyectarse heroína) fue el último en ser definido públicamente como problema social"¹¹. Esta criminalización diferencial respondería a motivaciones puramente sociales: "Había que desplazar a la mano de obra china —únicos fumadores en esa época— cuando se volvió amenazante competencia en el mercado de trabajo. Así observamos como para su criminalización predominó el interés económico sobre el médico"¹².

Es posible igualmente distinguir y dar un tratamiento diverso al problema de la

violencia narcotraficante y al fenómeno más general del contrabando de drogas. Distinciones de esa naturaleza permitirían asumir con menor histerismo bélico y fundamentalismo moralista —que no preocupación ética— el debate en torno a las drogas. La falta de ese debate social y la escalada represiva han llevado a que un problema social complejo e innegable se haya transformado inicialmente en un asunto criminal, el cual, debido a sus ramificaciones ha adquirido dimensiones sociopolíticas al imponerse por parte de los Estados Unidos el modelo represivo de seguridad nacional, ha generado niveles de violencia extremadamente elevados, y ha terminado por "narcotizar" una parte considerable de las relaciones internacionales de países como Colombia.

Ese desmonte del discurso dominante tal vez contribuya así a que nos alejemos de la "guerra a las drogas" que, como bien lo dice Thomas Szasz, es uno de los capítulos más recientes de la historia de la estupidez humana¹³. Sin embargo, lo trágico es que es posible que, mediante el mecanismo de la profecía que se autocumple, esta cruzada guerrera se convierta en algo cada vez más real en países como el nuestro. Y así, mientras nos acercamos al siglo XXI, cuando en círculos intelectuales y artísticos se empieza a hablar ya del post-modernismo, las drogas reciben un tratamiento premoderno fundamentalista más digno de épocas medioevales. Estamos frente a una nueva cruzada, una nueva guerra santa, una nueva causa justa. Ello nos recuerda

11 Citado por Rosa del Olmo. *La cara oculta de la droga*. Bogotá, Temis, 1986, p.9.

12 Op.Cit., p.9.

13 Ver Thomas Szasz "Contra el estado terapéutico: Derechos individuales y drogas" en *Nueva Sociedad*. Caracas, No.102, julio-agosto 1989, p.173 y ss.

la discusión de Guillermo de Baskerville con el abad del monasterio en donde se desarrollan los acontecimientos de la hermosa novela de Humberto Eco:

“Guillermo bajó la mirada y permaneció un momento en silencio. Después dijo: “La ciudad de Bréziers fue tomada y los nuestros no hicieron diferencias de dignidad ni de

sexo ni de edad, y pasaron por las armas a casi 20.000 hombres. Después de la matanza, la ciudad fue saqueada y quemada.

- Una guerra santa sigue siendo una guerra.

- Una guerra santa sigue siendo una guerra. Quizás por eso no deberían existir guerras santas”¹⁴.

14 Humberto Eco. *El nombre de la rosa*. Barcelona: Lumen, 1983, p.188.